

La tensión entre lo local y lo global: modernización neoliberal y resistencias centroamericanas

Kristina Pirker

Resumen

A partir de cuestionar la visión dominante que minimiza la conflictividad sociopolítica en los procesos de reestructuración capitalista neoliberal, el presente artículo revisa algunas formas de acción colectiva que han surgido en América Central después de finalizar las guerras civiles. El argumento de la autora es que los ejes de conflictividad social, generados por las dinámicas de reestructuración capitalista a escala mundial, son transnacionales y han estado impulsando a los movimientos sociales de la región a elaborar prácticas de acción y de protesta que involucran a más de un sector social y que atraviesan las fronteras nacionales. Al mismo tiempo, ante el repliegue de los gobiernos nacionales de los espacios locales hay una revitalización de identidades locales en defensa de los recursos propios de la comunidad.

Abstract

The article criticizes the dominant vision which minimizes sociopolitical conflicts in the processes of capitalist neoliberal transformation and studies some forms of collective action which took place in Central America after the civil wars. The author argues that the axis of social conflict, created by the dynamics of capitalist transformation on world scale, are "transnational" and have pushed the social movements in the region toward forms of collective action and protest which include more than one social sector and tend to cross national borders. At the same time the retreat of national governments out of local spaces leads to the revitalization of local identities as communities organize to defend their resources.

Existe, en nuestros tiempos, una cierta inclinación –promovida por el pensamiento neoconservador– por minimizar la presencia de protestas sociales y conflictos sociopolíticos en nuestras sociedades. Esto sucede también en el caso de Centroamérica donde la comparación entre los años setentas y ochentas, cuando la región era un escenario de enfrentamientos entre sujetos con proyectos políticos antagónicos, y el momento presente, caracterizado por la poca capacidad de convocatoria de los movimientos sociales y de los partidos de izquierda, se presta para afirmar el final de la conflictividad sociopolítica. Como el contexto, caracterizado por la violencia social y la precariedad, dificulta la acción colectiva, señalan algunos autores, son las Organizaciones No Gubernamentales (ONG's) los nuevos actores encargados de administrar la crisis social, canalizar los recursos de la cooperación externa y atender las necesidades de los sectores populares.¹ Sin

¹ Para este debate se pueden revisar los artículos sobre la defensa de los derechos laborales en las maquiladoras, por ejemplo: Bickham Méndez y Köpke (1999:83-103); Quinteros (2000:162-176); Armbruster-Sandoval (1999:108-128).

embargo, pese al final de las guerras civiles y la transición a la democracia (entre la derrota electoral del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en Nicaragua en 1990 y la firma del acuerdo de paz entre la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) y el gobierno guatemalteco en 1996), una mirada más cuidadosa hacia la región revela que las medidas de estabilización macroeconómica (programas de choque para controlar la inflación) y las políticas de reforma económica neoliberal (como las privatizaciones, la reestructuración de los gastos públicos y el adelgazamiento del Estado) han producido una serie de expresiones de protesta y resistencia, más o menos organizadas, por parte de las poblaciones directamente afectadas (véase, por ejemplo, Edelman, 1993:85-121; Evans, 1994; López López, 1998:75). Estas expresiones de descontento no permiten sostener que la conflictividad sociopolítica haya desaparecido.²

Más bien existen políticas desde el poder orientadas a ocultar los conflictos sociales, y que abarcan desde la poca atención que reciben las manifestaciones de protesta en los medios de comunicación hasta la criminalización de sus actores (Seoane y Taddei, 2000). De esta manera se logra naturalizar las relaciones sociales existentes, esto es, hacer aparecer el proyecto neoliberal como un modelo económico "racional" que, al no haber alternativas, se impuso prácticamente sin conflictividad después de las guerras y no como el resultado de un proceso histórico y consecuencia de luchas entre sujetos sociales con distintos proyectos de futuro.

Si, en cambio, se sostiene que en sociedades caracterizadas por relaciones de dominación y de explotación la oposición y la resistencia son fenómenos constantes, hay que partir de la premisa de que los conflictos también son permanentes, aunque no necesariamente se expresan de forma manifiesta. Los conflictos contribuyen a que los grupos sociales logren articular sus necesidades colectivas e identifiquen a sus semejantes y a sus adversarios, dando lugar a la construcción de voluntades colectivas y de movimientos sociales (Arrighi, Hopkins y Wallerstein, 1999:29 y ss). Pensar Centroamérica desde esta perspectiva permite analizar la región como un espacio atravesado por líneas de conflicto compartido que expresan relaciones de dominación y de poder, así como un lugar donde se van construyendo alianzas y redes de solidaridad entre diversos actores. Esto lleva a la pregunta de si las reacciones colectivas nacionales y locales, ligadas a la reestructuración capitalista, responden a una lógica de unificación –más allá de la aplicación homogénea de las recetas neoliberales por parte de los gobiernos, que ciertamente es un elemento unificador– y de constitución de sujetos que, compartiendo agravios y amenazas y sin tener que identificarse como "nuevos" o "viejos" actores, construyen nuevas alianzas y tejen solidaridades que van atravesando las fronteras nacionales.

² Entendemos por conflicto sociopolítico todo conflicto que altera el orden social quebrando o interrumpiendo temporalmente la reproducción de las relaciones sociales dominantes (Seoane y Taddei, 2000:61-65), en la dirección electrónica <http://osal.clacso.org/espanol/html/frevista.html>, pp. 62 y 63.

Los efectos desmovilizadores del proyecto neoliberal

A los aspectos históricos y culturales que comparte la región,³ y que han incidido en la acción colectiva en los últimos veinte años, se han añadido nuevos factores políticos y estructurales, producto de la implantación del proyecto neoliberal, que tienen un efecto particular sobre las dinámicas de la movilización social. Un primer paso para entender estas dinámicas en el momento presente es reconocer el significado político del modelo neoliberal; esto es, comprenderlo no sólo como una combinación de medidas económicas en función de la recuperación de la tasa de ganancia del capital sino como una respuesta política desde los sectores dominantes para restringir la democracia y contener la movilización popular. La desagregación de sujetos sociales con capacidad de unificar demandas y modificar el orden capitalista se pretende lograr con la descomposición de las funciones redistributivas del Estado, desmantelando los servicios públicos y limitando la democracia a un procedimiento electoral. Como bien señala Norbert Lechner: "hay que destruir el 'estatismo' para que las masas no puedan escapar a la disciplina del mercado. Hay que 'descentralizar' el poder político a fin de que el poder individual —la propiedad privada— no sea neutralizada por la organización de los desposeídos." (1982:25-70 y 59). Esta forma de dominación política, formalmente democrática, implica para la movilización social que, aunque exista un margen para la participación política principalmente a través de la participación electoral, la desagregación de los sujetos impide una canalización efectiva de las presiones sociales hacia el Estado, al mismo tiempo que la separación entre democratización política y democratización social acorta el horizonte histórico de los sujetos.

En el caso de Centroamérica la imposición de esta versión neoconservadora de la democracia se dio en un contexto particular: dado el autoritarismo de los regímenes anteriores, con excepción de Costa Rica, y los costos sociales que la guerra contrarrevolucionaria y el bloqueo comercial estadounidense habían significado para la Nicaragua sandinista, las democracias centroamericanas, a diferencia de las "transiciones desde arriba" que tuvieron lugar en el Cono Sur, fueron concebidas como conquistas populares y resultados de la amenaza revolucionaria de la izquierda (Paige, 1997:330 y ss). Por esto, la democratización política contó en un principio con una gran legitimidad social, respaldada por los primeros resultados electorales después de los acuerdos de paz que llevaron a la representación de la izquierda en parlamentos nacionales y en algunos municipios. Al mismo tiempo las organizaciones populares, vinculadas a las organizaciones guerrilleras, percibieron la transformación de éstas en partidos políticos, y en Nicaragua la entrada del FSLN a la oposición, como una oportunidad para recuperar autonomía política y administrativa pues marcó el fin de la subordinación de las propias necesidades a las estrategias de un aparato político-militar.⁴

³ Véase el artículo de Carlos Figueroa en este mismo número.

⁴ Entrevista con Guillermo López López (ANDEN) y José Bermúdez (FNT-UNE), Managua, Nicaragua, 15 de agosto de 2002; Cuenca y Páez, 2001:129-133. Y en la dirección electrónica <http://osal.clacso.org/espanol/html/frevista.html>, p. 133.

Admitir la diferenciación entre democratización política y social perjudicó a las organizaciones populares en varios sentidos. Al aceptar que la democratización política generaría la estabilidad necesaria para el crecimiento económico, el cual posteriormente posibilitaría la democratización social, se pospuso (por un tiempo indefinido) la elaboración de una contrapropuesta al discurso dominante. Esto debilitó de antemano a las organizaciones populares ante los grupos (neo)oligárquicos que ni económica ni políticamente habían sido desmantelados y, pese a ser profundamente antidemocráticos, supieron incorporar a su discurso político una noción de democracia que no comprometía medidas de redistribución económica.⁵ De esta manera, las mismas organizaciones dejaron de contar con un discurso contrahegemónico para desafiar la concepción neoconservadora de la democracia y contrarrestar los procesos de desmovilización política en las sociedades centroamericanas que han afectado los propios cuadros y bases sociales.

Si los cambios políticos han modificado los horizontes históricos y los contenidos programáticos de los movimientos sociales, la reestructuración capitalista, basada en la centralización del capital y en la división de los procesos de trabajo a escala mundial, ha afectado su campo de acción. Las políticas económicas orientadas al fortalecimiento de la producción, principalmente agroexportadora y maquiladora, para el mercado externo en detrimento de la producción para el mercado interno, no han generado suficientes empleos para absorber la fuerza de trabajo excedente y han aumentado la fragilidad de las economías centroamericanas frente a los altibajos de la economía internacional. Esto debilita a los actores colectivos porque, en este contexto, la amenaza empresarial de cerrar plantas y trasladarlas a otros países se convierte en una fuerte medida de control y de disciplinamiento social para impedir que trabajadoras y trabajadores actúen de manera colectiva y que los costos de la fuerza de trabajo aumenten.⁶

En el campo centroamericano, el efecto combinado de las políticas de apertura económica, la caída de los precios de los productos agropecuarios tradicionales (café, plátano y, a principios de los noventa, algodón) en el mercado internacional y las catástrofes naturales –huracanes, inundaciones, terremotos y sequías– han agravado la crisis agraria produciendo una descomposición del tejido social en sociedades donde, entre el 44 por ciento (Panamá) y el 61 por ciento (Guatemala) de la población vive todavía en áreas rurales.⁷ Nicaragua y Honduras son los casos más extremos donde las inundaciones, las sequías y el quiebre de las fincas cafeta-

⁵ En su estudio sobre las elites cafetaleras en Costa Rica, El Salvador y Nicaragua, Jeffery Paige señala que en estos dos últimos países, y en menor medida en Costa Rica, las burguesías agro-industriales entienden por democracia –antes que nada– libre empresa y un Estado capitalista moderno y no la incorporación de las clases dominadas al sistema político (1997:334-335); Martí i Puig (2000).

⁶ Una maniobra de los empresarios en las zonas francas de la región para impedir la sindicalización de las trabajadoras es cerrar la empresa, despedir a las trabajadoras y reabrir la planta bajo otro registro. Entrevista con Ana Concepción Menjivar y Jacqueline Sagastizado de la Asociación Movimiento de Mujeres "Mélida Anaya Montes", San Salvador, 30 de agosto de 2002; Vilas (2000:39-66).

⁷ Según los datos del Banco Mundial, en 1998 en Costa Rica el 53 por ciento del total de la población era población rural, en El Salvador el 54 por ciento, en Honduras, Nicaragua y Belice el 49 por ciento, el 45 por ciento y el 47 por ciento, respectivamente (World Bank, 2000).

leras, dejando a miles de jornaleros agrícolas sin empleo, han llevado a la pauperización del campesinado, el cual en su gran mayoría vive en condiciones de subsistencia o, amenazado por el hambre, se ve obligado a abandonar el campo.⁸

En otras palabras, la coyuntura actual no fomenta el despliegue de los movimientos sociales en Centroamérica. Tienen que lidiar con factores que fomentan la búsqueda de salidas individuales, también al interior de las mismas organizaciones, y con el desencanto social con las democracias realmente existentes que se manifiesta en encuestas y en altas tasas de abstencionismo electoral (Maihold y Córdova, 2002:301-329). El modelo económico, basado en la explotación de los recursos naturales y en la superexplotación de una mano de obra semicalificada, agudiza la vulnerabilidad histórica de las sociedades centroamericanas. Como consecuencia, va creciendo el sector informal como única fuente de ingreso, el cual no es garantía contra la pobreza y la exclusión,⁹ se acelera el éxodo de la población rural hacia las ciudades y se intensifican los flujos migratorios. Una muestra triste de la destrucción del tejido social son los indicadores de delitos violentos que señalan a la región como una de las más peligrosas de América Latina.¹⁰

Más allá de las luchas gremiales: las movilizaciones contra las privatizaciones

En medio de un contexto que indudablemente dificulta el desenvolvimiento de los sujetos sociales, no obstante, han surgido formas de acción colectiva relacionadas con los ejes de conflictividad social que la reestructuración capitalista ha generado. Estos nuevos ejes se articulan con los antagonismos estructurales históricos que estuvieron en la base de los procesos revolucionarios pasados, la extrema concentración de la tierra y la superexplotación de la fuerza de trabajo, y que han dado lugar a luchas sindicales y agrarias de carácter clasista –por ejemplo huelgas magisteriales, ocupaciones de tierra, etcétera– las cuales, aunque con menos perfil político y con menos convocatoria que en el pasado, han puesto de manifiesto que los viejos conflictos, en vez de resolverse, se han agudizado con la reestructuración neoliberal. Un ejemplo de la persistencia y agudización de las luchas de carácter clasista son las movilizaciones campesinas a raíz de la crisis del agro y que han utilizado diversas formas de presión, desde ocupaciones de tierra hasta

⁸ Entrevista con Armando Bartra, Ciudad de México, 27 de marzo de 2003 (publicada en este número de *Estudios Latinoamericanos*); Rocha (2001).

⁹ De acuerdo al Informe de Desarrollo Humano, 2002 del PNUD, en Costa Rica y Panamá, los países menos polarizados en términos sociales de la región, el 22 por ciento y el 37.3 por ciento de la población vive por debajo del límite nacional de pobreza; en El Salvador es el 48 por ciento de la población. En el caso de Guatemala, Honduras y Nicaragua más de la mitad de la población vive por debajo del límite de la pobreza: el 57.9 por ciento, el 53 por ciento y el 50 por ciento, respectivamente (PNUD:157-158).

¹⁰ Tomando como indicador de peligrosidad de los delitos la tasa de homicidios por 100 mil habitantes, Centroamérica en 1996 contó con un promedio regional de 27 homicidios, respectivamente, en contraste con 17 homicidios como promedio de toda América Latina. Datos tomados de Ángel Saldomando (1998:72-87).

marchas de los pueblos y comunidades hacia los centros departamentales y nacionales, en Nicaragua llamadas "marchas de hambre", para reivindicar un mayor compromiso de los gobiernos con el campo.

Al trascender el recorte de los conflictos laborales y agrarios clásicos, se puede observar una multiplicidad de formas de protesta que involucran a una diversidad de actores colectivos, empezando por el caso especial de los países que habían sido escenario de guerras civiles (Nicaragua, El Salvador, Guatemala). Allí, las movilizaciones de los excombatientes de la contrarrevolución, del ejército y de los grupos paramilitares, todos ellos en su mayoría campesinos, al demandar recompensas materiales –tierra, créditos, perspectivas laborales– por los "servicios" prestados durante las guerras, hacen recordar, a su manera, las expectativas defraudadas y promesas no cumplidas por los acuerdos de paz.

Además, se han dado movilizaciones en la región, directamente ligadas a las nuevas formas de dominación y explotación creadas por la reestructuración capitalista, que apuntan a la construcción colectiva de nuevas prácticas y discursos. Un primer caso que queremos presentar son las movilizaciones sociales contra la apertura, a través de la privatización o bajo la forma de concesiones, de los servicios públicos a la inversión privada. Estas protestas se dieron en los últimos años, en varios países de la región, siendo los casos de mayor proyección internacional las jornadas de protesta popular y de huelga general contra la privatización del Instituto Costarricense de Electricidad y Telecomunicaciones (ICE) en marzo y abril de 2000 y las huelgas de los trabajadores y médicos del Instituto del Seguro Social Salvadoreño (ISSS) en 1999-2000 y 2002-2003. En estos dos procesos los protagonistas del movimiento fueron los sindicatos de las instituciones amenazadas por la privatización que, en alianza con otros actores sociales, jugaron un papel central tanto en la "puesta en marcha" como en el desenvolvimiento del movimiento antiprivatizador. En el caso costarricense, el eje de las movilizaciones fueron los electricistas junto al movimiento estudiantil, en El Salvador los sindicatos del Instituto del Seguro Social, el gremio nacional de los médicos y los usuarios de los servicios de salud.

La presencia y combatividad del sindicalismo del sector público en contra de las políticas económicas neoliberales no son exclusivas de Centroamérica, también han sido constatadas en otros países tanto en Europa como en América Latina.¹¹ Estos sindicatos organizan a un sector laboral que, a raíz de la ampliación de las funciones estatales después de la Segunda Guerra Mundial, creció e incorporó a una gran cantidad de mujeres y de profesionales con un nivel educativo mayor que el promedio de la población. La relativa seguridad y estabilidad laboral en este sector, reflejado en la construcción de sindicatos fuertes, ha permitido a estos trabajadores utilizar formas de lucha laboral más radicales que los empleados del sector privado. La dimensión gremial de las movilizaciones contra

¹¹ Véase, por ejemplo, para el caso francés, Vakaloulis (2000:158-164); para América Latina, Roman y Velasco Arregui (2001:52-71).

la privatización se origina en que precisamente esta estabilidad laboral y la presencia sindical están amenazadas por la modernización neoliberal, la cual implica el empeoramiento de las condiciones laborales, el debilitamiento de los sindicatos en el sector público, la fragmentación y privatización de las empresas públicas más rentables y el cierre de otras.

Pero la fuerza y el alcance de las jornadas contra las privatizaciones radicó en que la movilización, pese a ser desencadenada por los sindicatos no se limitaba a la defensa de intereses gremiales, sino se apoyaba en, y a la vez reforzaba, un ambiente social generalizado de rechazo a los proyectos de privatización.¹²

La superación de una lógica gremial por parte de los sindicatos respondió también a las estrategias gubernamentales orientadas a criminalizar a algunos activistas y desprestigiar al movimiento sindical, señalando que éste actuaba en función de intereses particulares o partidistas. Para contrarrestar la estrategia de desprestigio, los sindicatos tuvieron que elaborar un discurso que enfatizaba la defensa de los intereses generales de la población. Este discurso partió de la posición que ocupan ciertos servicios y recursos naturales que, por ser estratégicos para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población pobre, no deben ser privatizados y abiertos a la inversión extranjera.

Las organizaciones sindicales del Instituto del Seguro Social, por ejemplo, justificaron la huelga no tanto por sus necesidades gremiales (aunque esto también estaba presente), sino a través de la reivindicación del derecho a la salud para todos los salvadoreños y salvadoreñas. A partir de centrar el debate en este derecho básico los actores del movimiento contra la privatización pudieron criticar no sólo el proceso de descapitalización de las instituciones públicas y demandar una mejor provisión de servicios médicos, sino cuestionar el mensaje central del discurso oficial según el cual la estrategia más adecuada para asegurar el derecho a la salud era la apertura del sector a la inversión privada.

Tanto en El Salvador como en Costa Rica, la presión social a favor de un debate público obligó a los gobiernos a instalar comisiones o consejos en donde se debería debatir el futuro de las instituciones públicas. En Costa Rica la comisión especial mixta, conformada por representantes del gobierno, del empresariado, de los sindicatos y organizaciones sociales se reunió entre abril y noviembre de 2000 para acordar la modernización del ICE. Al no encontrar ningún consenso, la ley y las propuestas de reforma de todos los actores (también de los opositores a la privatización) fueron archivadas y la privatización del ICE se detuvo. En El Salvador el conflicto evolucionó de forma distinta: de las cinco propuestas recopiladas por el Consejo de Reforma del Sector Salud (convocado después de

¹² Según una encuesta que la empresa chilena Latinobarómetro realizó en abril y mayo de 2002 en Centroamérica, incluyendo Panamá, el 71 por ciento de la población encuestada se manifestaba en contra de la privatización de los servicios básicos. Datos citados en: "En Centroamérica: 71 por ciento dice No a privatizaciones", en *El Nuevo Diario*, Nicaragua, 7 de septiembre de 2002, y en la dirección electrónica <<http://www.ni.elnuevodiario.com.ni/archivo/2002/septiembre/07-septiembre-2002/nacional/nacional4.html>>.

la primera huelga en 1999) las propuestas sindicales no fueron tomadas en cuenta por el gobierno de Francisco Flores al presentar nuevamente el proyecto de privatización en el 2002. Esto agudizó nuevamente el conflicto entre sindicatos, autoridades del ISSS y gobierno. La huelga que estalló en septiembre de 2002 parecía culminar con una victoria del movimiento contra la privatización, al lograr la aprobación de un decreto parlamentario que prohibiría la privatización del sistema de salud. Pero un cambio en las alianzas parlamentarias llevó a la derogación del decreto por ARENA y otros partidos de centro-derecha. Por lo tanto, las soluciones del conflicto en Costa Rica y en El Salvador, es de suponer que no definitivas, pusieron de manifiesto las limitaciones en los sistemas políticos neoliberales para que las propuestas y demandas populares incidan sobre la formulación y la realización de las políticas gubernamentales.

El debate sobre la modernización de las instituciones públicas que la ofensiva neoliberal abrió, criticando la ineficiencia y proponiendo la privatización de las mismas, lleva a los actores del movimiento contra las privatizaciones a un problema que va más allá de la defensa de lo existente. En primer lugar, la crítica a las políticas públicas neoliberales y al fatalismo del discurso gubernamental apunta a un cuestionamiento del concepto neoliberal de la política que busca reducirla a un procedimiento técnico de administración de recursos y de selección de elites. La demanda sindical de que la modernización de las instituciones públicas debería ser motivo de un debate público entre todos los actores sociales, pone en tela de juicio la práctica tecnócrata de que pequeños círculos de representantes gubernamentales, empresarios y organismos financieros internacionales tomen las decisiones económicas sin que la ciudadanía se entere y, mucho menos, pueda intervenir (Cativo, 2001; Fuentes Belgrave, 2001). En segundo lugar, al discutir el futuro de las instituciones públicas, las cuales deben garantizar el acceso universal, contar con mejores servicios, ser más democráticas, más participativas, menos burocráticas y con un funcionamiento interno más transparente, conduce a una pregunta de contenido político que se refiere al tipo de Estado que la sociedad necesita.

Más allá de las luchas nacionales: el movimiento social mesoamericano

La pregunta sobre el tipo de Estado que la sociedad necesita nos lleva a un problema que las respuestas colectivas de resistencia a la modernización neoliberal, por lo menos hasta estos momentos, no han podido resolver satisfactoriamente. Aunque se reconozca la responsabilidad de procesos y actores internacionales en las transformaciones económicas nacionales, el marco de referencia para la protesta sigue siendo principalmente el Estado-nación y el interlocutor principal el gobierno. Entre los procesos orientados a superar esta limitación destaca el intento de distintos actores nacionales de Centroamérica y México por crear una voluntad colectiva denominada "Movimiento Social Mesoamericano", a partir del lanzamiento público por el gobierno mexicano del Plan Puebla-Panamá. Este megaproyecto regional orientado a unificar las estrategias de explotación de los

recursos estratégicos del sur-sureste mexicano y del istmo centroamericano (la biodiversidad, la posición geográfica, el petróleo y el agua) y preparar las condiciones para la implantación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) no se ha concretado políticamente (Barreda Marín, 2001:133-214). Sin embargo se ha convertido en un catalizador para construir, desde el año 2001, una red regional de organizaciones nacidas de resistencias locales y nacionales porque ha logrado la unificación de una serie de agravios generados y agudizados por la transformación estructural capitalista, bajo una sola imagen, como lo señala Armando Bartra, cronista de los encuentros mesoamericanos, "porque necesitamos un villano con nombre y apellido para personalizar el neoliberalismo, y el eufónico Plan Puebla Panamá es una suerte de Pedro Páramo de los megaproyectos expoliadores" (2001).

Las demandas giran principalmente en torno a tres ejes: la defensa del medio ambiente y la protección de los recursos biológicos de la región; la defensa de la cultura y de los pueblos indígenas, y la elaboración y la discusión de modelos alternativos de desarrollo, lo cual demuestra el carácter principalmente agrario e indígena de las organizaciones que conforman esta red. Aunque la defensa de derechos laborales y sindicales fue incluida en la agenda, las organizaciones laborales, con excepción de los sindicatos centroamericanos de los trabajadores del campo, no tienen una gran presencia.

Los actores se apropian del concepto Mesoamérica –que, recordemos, proviene originalmente de la antropología y arqueología para referirse a las sociedades prehispánicas– y actualizan su significado para construir una identidad colectiva más allá de las identidades sectoriales y nacionales. Al mismo tiempo se conserva un elemento importante del significado original: las raíces indígenas, compartidas por los países de la región hasta el norte de Costa Rica, que atraviesan las fronteras nacionales. El uso de este término para auto-identificarse indica el papel central de las organizaciones indígenas en la construcción del movimiento regional,¹³ aunque se busca ampliar el significado de lo mesoamericano para incluir en el proceso de construcción de una identidad regional no sólo a los pueblos originarios sino también a las identidades mestizas y negras. La apropiación del término, más que fijar una identidad, apunta hacia las potencialidades de los actores locales y nacionales para desarrollar prácticas, definir objetivos estratégicos y proyectos políticos orientados a atravesar las fronteras del Estado-nación. De esta manera, Mesoamérica se está transformando de un concepto analítico, manejado en las academias, en un programa social y político que pretende aglutinar a actores colectivos muy distintos entre sí. Para lograr este objetivo se destacan raíces, historias y, finalmente, agravios y amenazas actuales, determinados

¹³ El protagonismo indígena en la unificación y construcción de una voluntad colectiva regional había sido preparado por el trabajo pastoral de la Iglesia Católica en las comunidades indígenas desde los años sesentas, la organización en el marco regional de la conmemoración de los 500 años de conquista española y el debate en torno a los derechos y la autonomía indígena de los años noventas. Entrevista con Armando Bartra, Ciudad de México, 27 de marzo de 2003; Bengoa (2000).

por los proyectos de reestructuración y regionalización capitalista que las sociedades centroamericanas y la mexicana tienen en común.

No cabe duda que la constitución de este actor regional y "pluriétnico" es un proceso que apenas está iniciando, un camino problemático y lleno de obstáculos. La construcción de la imagen de un enemigo y de raíces comunes para consolidar sentimientos de pertenencia y de solidaridad es un aglutinador débil para superar la heterogeneidad interna respecto al origen de clase, de intereses y el grado de afectación por los megaproyectos de los integrantes, por lo cual habría que hablar más que de un actor colectivo de un movimiento en vías de construcción. La heterogeneidad del movimiento mesoamericano, tanto respecto a los orígenes como a los intereses de las organizaciones que lo conforman, se expresa, por ejemplo, en los roces entre las ONG's, constituidas por expertos, financiadas con recursos externos y con capacidad de interlocución con organismos internacionales, y las organizaciones de base, cuyo referente sigue siendo principalmente el marco nacional. Las críticas de las organizaciones de base al protagonismo de los expertos de las ONG's llevaron, un año después de la inauguración de los Foros Sociales Mesoamericanos, a la separación entre los Encuentros Campesinos Mesoamericanos, pensados como plataforma de las organizaciones de base para debatir y planificar objetivos estratégicos y formas de acción en el plano regional, y los Foros Mesoamericanos donde han predominado los expertos e intelectuales de las ONG's. Esta separación está documentada por Armando Bartra quien destaca la participación activa de los campesinos en sus encuentros:

El Encuentro Mesoamericano fue una reunión convocada, operada y animada casi exclusivamente por organizaciones campesinas, en la que los rústicos definieron la agenda, sostuvieron los debates y tejieron los acuerdos. En tiempos de «sociedad civil» y cuando los grupos profesionales y sus expertos pretenden hablar en nombre de todos, es alentador un foro en el que las organizaciones de base sean la sartén y tengan el mango. Resumiendo: entre tanto norteado, los campesinos miran al Sur (Bartra, 2002).

¿Una paradoja? La revitalización de las identidades locales

Este texto no estaría completo sin mencionar una tercera variante de respuestas colectivas a la reestructuración capitalista que apunta a la revitalización de las identidades locales. Estas prácticas de protesta nacen, por lo general, en la frontera entre lo urbano y lo rural, en municipios pequeños y relativamente lejos del centro, para después trasladarse a las capitales. Es la indignación social provocada por políticas del gobierno central —que abarcan desde megaproyectos de infraestructura vial hasta proyectos de leyes para reglamentar la explotación privada de recursos naturales locales— implantadas sin el consentimiento de los municipios lo que desencadena la acción colectiva. Tanto Nicaragua como Honduras

fueron en el año 2002 escenario de movilizaciones en contra de la privatización de recursos naturales, cuando los gobiernos anunciaron proyectos de leyes para privatizar el agua y los bosques, en el caso de Honduras, y el agua, en el caso de Nicaragua. En Honduras los actos de presión (cierre de carreteras, marchas, etcétera) que, en octubre de 2002, fueron organizados para impedir la aprobación de una serie de leyes orientadas a reglamentar la privatización del agua y de los recursos naturales forestales iniciaron en el municipio de Progreso, un municipio cerca de San Pedro Sula. Las movilizaciones se difundieron por el país durante octubre y noviembre y llegaron a la capital, Tegucigalpa, donde se producían enfrentamientos violentos entre la policía y los manifestantes, hasta que el presidente Maduro detuvo el procedimiento legislativo. También en Nicaragua, en agosto y septiembre de 2002, el anuncio de que se concediera la administración de los servicios de agua de los municipios Jinotega, Matagalpa, León y Chinandega a empresas privadas, desencadenó una serie de movilizaciones en los municipios afectados que terminaron cuando la propuesta de ley fue congelada (Moreno, 2002:24-30; Hernández Ramos, 2002).

En estas acciones la formulación del discurso y la definición de las estrategias no está a cargo de actores colectivos tradicionales (por ejemplo los partidos, los sindicatos o el movimiento estudiantil), aunque estén presentes en la movilización. Más bien son alianzas, conformadas por representantes del pequeño y mediano empresario, de los sectores populares y campesinos, asociaciones de consumidores, ONG's, los alcaldes e incluso algunos notables, que canalizan, en el marco de la comunidad o el municipio, las preocupaciones inmediatas, organizan la resistencia y buscan la alianza con otros municipios afectados para detener la apropiación de recursos concebidos como propios de la comunidad. Por lo general este actor colectivo aparece primero en el plano local, ante la amenaza inmediata de la aprobación de las leyes o el otorgamiento de las concesiones, para llevar la protesta en forma de peticiones, plantones o manifestaciones, a la capital y, después, se repliega nuevamente a su lugar de origen donde –por lo menos así parece– se desarticula hasta que otra amenaza a la comunidad lo hace resurgir.

Este fenómeno de resistencia colectiva parece espontáneo y coyuntural, además, con un discurso que se limita a la negación de la apropiación de los recursos propios por agentes externos. Pero hace suponer que existen sujetos, redes de solidaridad y dinámicas a nivel local –precarios y amenazados por los procesos de desintegración social– que permanecen ocultos, por lo menos para una mirada acostumbrada a ver solamente procesos nacionales, y se activan en situaciones percibidas como amenazantes para la integridad de la comunidad.

Una posible lectura de estas luchas consiste en interpretarlas como rebelión de los municipios contra el centralismo que históricamente ha caracterizado a las repúblicas centroamericanas y como un momento en el proceso de revitalización de las identidades locales a partir de la revalorización simbólica de lo propio. Movilizaciones municipales y comunales contra agravios, como el empeoramiento de los servicios y el aumento de las cuotas a raíz de las privatizaciones de los servicios básicos, la depredación de los recursos naturales, la marginación política

de los municipios, etcétera, dan cuenta de la forma en que los habitantes de un lugar actúan colectivamente en defensa de su localidad y para incidir sobre el futuro de la misma. De esta manera se pone de manifiesto cómo la localidad contribuye a la formación de las identidades sociales, no sólo porque es una concreción de relaciones sociales de dominación y de solidaridad, sino también por ser un espacio geográfico, delimitado por los desplazamientos cotidianos, donde se desarrollan prácticas, rutinas e instituciones de la vida cotidiana, y también los conflictos (Taylor, 1994:269 y ss). El resurgimiento de identidades locales no quiere decir que identidades sectoriales y conflictos clasistas están desapareciendo o han sido subsumidos en la comunidad. Más bien han sido activadas, tal vez temporalmente, ante la irrupción depredadora y cada vez más violenta del capitalismo neoliberal en los espacios locales y el repliegue de los gobiernos nacionales para defender lo que se concibe como propio de la comunidad.

A manera de conclusión: acción colectiva entre lo local y lo global

La evaluación del momento presente siempre ha sido un problema para la investigación social. Como lo señala Agustín Cueva: "Desbordados por un presente enmarañado y proteico, que por lo regular sólo vemos a través del gabinete y la cátedra, hasta tenemos dificultad en captar todas las virtualidades del momento histórico en el que estamos involucrados" (Cueva, 1977:238). Esto es todavía más cierto para la evaluación de un momento de transición como lo han sido los últimos años. El carácter inconcluso de los procesos sociales y la multiplicidad de actores involucrados, que acabamos de presentar, es la principal dificultad que tenemos para visualizar todas las potencialidades encerradas en estas respuestas colectivas a la modernización neoliberal.

No cabe duda que los ejes de conflictividad social, generados por las dinámicas de reestructuración capitalista a escala mundial, tienden a ser transnacionales y han estado impulsando a los movimientos sociales de la región a elaborar prácticas de acción y de protesta que involucran a más de un sector social y que van más allá de las fronteras nacionales. Esto no quiere decir que hayan desaparecido las formas tradicionales bajo las cuales se ha expresado la conflictividad social, tampoco que el proceso de mundialización capitalista se traduce automáticamente en una internacionalización o regionalización de la acción colectiva, pero vuelve más agudo para los actores colectivos el dilema de que ellos, conservando como referente para su acción el territorio nacional y como interlocutor principal su respectivo gobierno, se enfrentan a adversarios –por ejemplo las empresas textiles que operan en las zonas maquiladoras o las corporaciones farmacéuticas que buscan explotar la biodiversidad de la región– que actúan y "piensan" en dimensiones mundiales. La necesidad de construir alianzas que atraviesan las fronteras se expresa tanto en el discurso de los actores colectivos como en sus esfuerzos organizativos por construir coordinadoras y redes regionales de organizaciones.

Además de que existe una tendencia hacia la regionalización de la acción colectiva, y al mismo tiempo que se mantienen las protestas sectoriales de carácter gremial, agrario, etcétera, la localidad, como espacio de resistencia colectiva, adquiere importancia. No cabe duda que las luchas por la autonomía y los derechos indígenas es el ejemplo más claro de esta tendencia en la región. Pero la revitalización de las identidades locales ante las amenazas depredadoras de las corporaciones transnacionales, que se manifiesta en la defensa de la localidad y en la revalorización simbólica de lo propio, al mismo tiempo que es una manifestación de resistencia a la modernización neoliberal puede limitar la constitución de sujetos sociales regionales. La fragmentación, como consecuencia de las mismas dinámicas estructurales del capitalismo junto con la persistencia de prácticas nacionales de protesta y de solución institucional de conflictos, puede implicar la reducción de la acción colectiva al contexto nacional.

Claro está que se necesitan algunas condiciones mínimas para la superación de los factores que obstaculizan el despliegue de la acción colectiva. En primer lugar, se requiere un mínimo de tejido social intacto y de margen de maniobra para la organización. Por esto la movilización social en la región tiene más probabilidades de nacer en los municipios más pequeños que en las capitales, aunque después son llevados a las capitales; por esto las luchas laborales se han desarrollado principalmente en el sector público, donde las organizaciones sindicales tienen mayor margen de maniobra, y no en el sector privado o en las maquiladoras.

Y, finalmente, como lo demuestran las movilizaciones contra las privatizaciones en el sector público, la acción colectiva requiere de un mínimo de apoyo social y de difusión pública. Esta difusión pública puede contribuir también a un proceso colectivo de aprendizaje, que va más allá de los sujetos directamente involucrados en el conflicto, sobre lo que es socialmente deseable y políticamente posible, una percepción que es modificable por la misma acción de los sujetos. Y esto es la respuesta –todavía abierta– a la pregunta de si las dinámicas que favorecen una unificación regional de la acción colectiva en Centroamérica pueden dominar sobre los factores sociales y políticos desintegradores. Esta respuesta se da en el plano de la misma práctica de los actores y de los movimientos sociales.

Bibliografía

- Armbruster-Sandoval, Ralph (1999), "Globalization and Cross-Border Labor Organizing. The Guatemalan Maquiladora Industry and the Phillips Van Heusen Workers Movement.", en *Latin American Perspectives*, Riverside, California, núm. 2, vol. 26, marzo.
- Arrighi, Giovanni, Terence K. Hopkins e Immanuel Wallerstein (1999), *Movimientos antisistémicos*, Madrid, Ed. Akal.
- Barreda Marín, Andrés (2001), "Los peligros del Plan Puebla-Panamá", en Armando Bartra (coordinador), *Mesoamérica. Los ríos profundos. Alternativas plebeyas al Plan Puebla-Panamá*, México, Ed. Instituto Maya A. C.

- Bartra, A. (2001), "Rústicas revueltas en Xéla. Y que tiemble el Plan Puebla-Panamá", en *Rebelión*, 23 de diciembre, <<http://www.rebelion.org>>.
- (2002), "Entre tanto norteadado, los campesinos miran al Sur. La invención de Mesoamérica", *La Jornada en Internet*, México, 11 de mayo, <<http://www.lajornada.unam.mx>>.
- Bengoa, José (2000), *La emergencia indígena en América Latina*, México, Fondo de Cultura Económica.
- Bickham Méndez, Jennifer y Ronald Köpke (1999), «Gender und Transnationalismus: Zentralamerikanische Frauenorganisationen zwischen transnationaler Konkurrenz und Kooperation in der Bekleidungsindustrie», en *Peripherie*, Frankfurt, Main, núm. 75.
- Cativo, Marco Antonio R. (2001), *Reforma del Sector Salud. Una necesidad impostergable para la Nación*, San Salvador, Comunicado del STISSS, agosto.
- Cuenca, Breny y Rodrigo Páez (2001), "Las luchas sociales en Centroamérica, mayo-agosto de 2001", en *Observatorio Social de América Latina*, Buenos Aires, núm. 5, septiembre, <<http://osal.clacso.org/espanol/html/frevista.html>>.
- Cueva, Agustín (1977), *El desarrollo del capitalismo en América Latina*, México, Siglo XXI.
- Edelman, Marc (1993), "Costa Rica: la cultura política de la protesta campesina contra el ajuste estructural", en Carlos Vilas (coordinador), *Democracia emergente en Centroamérica*, México, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades, UNAM.
- Evans, Trevor (coordinador) (1994), *La transformación neoliberal del sector público. Ajuste estructural y sector público en Centroamérica y el Caribe*, Managua, Latino Editores/CRIES.
- Fuentes Belgrave, Laura (2001), "Las tres semanas del combo", en *Se mueve, Costa Rica*, marzo, <http://semueve.netfirms.com/arch_ice/03_01_aniversario_combo_cronica.htm>.
- Hernández Ramos, Noel (2002), "Privatizarán agua en dos ciudades", en *Red Nacional de Consumidores de Nicaragua*, 31 de julio, <http://nuevaradio.org/comunica/noticias/venta_enacal_lp_020731.htm>.
- Lechner, Norbert (1982), "El proyecto neoconservador y la democracia", en Daniel Camacho et al., *Autoritarismo y alternativas populares en América Latina*, San José, Costa Rica, FLACSO/EUNED.
- López López, Guillermo (1998), *Luchas magisteriales en Nicaragua*, Managua, Proyecto de Capacitación Sindical FNT-SID/LO-FTF.
- Maihold, Günther y Ricardo Córdova (2002), "Democracia y ciudadanía en Centroamérica", en Klaus Bodemer y Eduardo Gamarra (editores), *Centroamérica 2020. Un nuevo modelo de desarrollo regional*, Caracas, Nueva Sociedad.
- Martí i Puig, Salvador (2000), "Centroamérica: ¿democracia en la región? Una década de paradojas", en *Envío*, Managua, julio, <<http://www.uca.edu.ni/publicaciones/revistas/envio/index.html>>.
- Moreno, Ismael (2002), "En el primer año de Maduro el agua encendió el fuego", en *Envío*, Managua, núm. 249, año 21, diciembre.

- Paige, Jeffery M. (1997), *Coffee and Power. Revolution and the Rise of Democracy in Central America*, Cambridge, Mass., Harvard University Press.
- Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), *Informe sobre Desarrollo Humano 2002. Profundizar la democracia en un mundo fragmentado*. <<http://www.undp.org/hdr2002/espanol>>.
- Quinteros, Carolina (2000), "Acciones y actores no sindicales para causas sindicales. El caso del monitoreo independiente en Centroamérica", en *Nueva Sociedad*, Caracas, núm. 168, septiembre-octubre.
- (2002), "Nuevas fronteras para la acción laboral. El caso de los códigos de conducta en Centroamérica y la acción de las organizaciones de mujeres", en *Estudios Centroamericanos*, San Salvador, núm. 643, año LVII, mayo.
- Rocha, José Luis (2001), "Sala de urgencias: el agro a cuidados intensivos", en *Envío*, Managua, enero-febrero, <<http://www.uca.edu.ni/publicaciones/revistas/envio/2001.htm>>.
- Roman, Richard y Edur Velasco Arregui (2001), "Neoliberalism, Labor Market Transformation and Working Class Responses. Social and Historical Roots of Accommodation and Protest", en *Latin American Perspectives*, Riverside, California, núm. 4, vol. 28, julio.
- Saldomando, Ángel (1998), "Violencia e inseguridad en América Central: de la guerra a la gestión cotidiana de la violencia", en PNUD, *Violencia en una sociedad en transición*, San Salvador, PNUD, <<http://www.violencia.elsalvador>>.
- Seoane, José A. y Emilio H. Taddei (2000), "La conflictividad social en América Latina", en *Observatorio Social de América Latina*, Buenos Aires, núm. 2, septiembre. <<http://osal.clacso.org/espanol/html/frevista.html>>.
- Taylor, Peter J. (1994), *Geografía política. Economía-mundo, Estado-nación y localidad*, Madrid, Trama Editorial.
- Vakaloulis, Michel (2000), "Antagonismo social y acción colectiva", en *Observatorio Social de América Latina*, Buenos Aires, núm. 2, septiembre, <<http://osal.clacso.org/espanol/html/frevista.html>>.
- Vilas, Carlos (2000), "Deterioro laboral y exclusión social: la otra cara del crecimiento", en *Acta Sociológica*, México, Centro de Estudios Sociológicos, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, núm. 28-29, año 13, enero-agosto.
- World Bank (2000), *Rural Development Indicators Handbook*, New York, World Bank, marzo, <<http://www-wds.worldbank.org>>.